

INICIO EJECUCIÓN DE HONORARIOS Y PIDO EMBARGO –
PIDO QUE SE FORME INCIDENTE SEPARADO
PLANTEO INCONSTITUCIONALIDAD

JUICIO: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO 24 DE SEPTIEMBRE 785 vs
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
S/NULIDAD-REVOCACIÓN – EXPTE 53/12

Excma. Cámara
Contencioso Administrativo
Sala III

Patricio García Pinto, abogado, por derecho propio,
fijando domicilio en el casillero digital 20-25542403-4, a V.E. digo:

I – INICIO EJECUCIÓN DE HONORARIOS Y PIDO EMBARGO

Encontrándose firme la sentencia que reguló mis honorarios por la actuación profesional que me cupo en la PRIMERA INSTANCIA de esta causa, y no habiéndoseme pagado los mismos en el plazo de ley, vengo a iniciar su ejecución contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, condenada en costas. A ella le reclamo el pago de la suma de \$ 1.132.611,62 expresados a valores del 31/03/22 según planilla aprobada por decreto del 13/05/22, con más los intereses, actualizaciones y demás acrecidas que correspondieren hasta la fecha de total cancelación. Pido que se la intime de pago y que se mande trabar EMBARGO sobre toda suma que la ejecutada tuviere depositada por cualquier concepto en el BANCO MACRO S.A., hasta cubrir la suma reclamada más la que V.E. estime suficiente para cubrir acrecidas.

A los fines de la intimación, que debe hacerse en el domicilio real de la ejecutada, sito en calle 9 de Julio 598 de San Miguel de Tucumán, adjunto bono de movilidad.

Hago constar que promuevo esta ejecución sin perjuicio de los honorarios que me corresponden por la actuación que me cupo en el Recurso de Casación, cuya regulación peticiono por cuerda separada.

II - PIDO QUE SE FORME INCIDENTE SEPARADO

Para que esta ejecución de honorarios no interfiera el desarrollo del proceso principal, PIDO QUE SE FORME INCIDENTE SEPARADO, a cuyo fin acompaño las siguientes copias:

- 1º) Sentencia de regulación de honorarios por actuación en primera instancia, firmé.
- 2º) Cédula que notifica la regulación a la Municipalidad de S. M. Tucumán.
- 3º) Cédula que notifica la regulación a mi parte.
- 4º) Planilla de actualización al 31/03/22, que asciende a la suma de \$ 1.132.611,62
- 5º) Decreto del 13/05/22 que aprueba la planilla de actualización.

III - PLANTEO INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 8851 Y SUS CONCORDANTES, Y DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 4973 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 4272.

Subsidiariamente, para la improbable eventualidad de que no se concediera el embargo por considerar aplicable la ley nº 8851 y sus concordantes, así como la ordenanza municipal nº 4973 (28/04/2016) y su decreto reglamentario nº 4272 (07/12/2016), dejo planteada la inconstitucionalidad de tales normativas y de cualquier otra complementaria o modificatoria de las mismas, que se dictare hasta que se resuelva esta articulación, que dispusiera la emergencia económica y la inembargabilidad de las rentas del municipio accionado. Ello en mérito a consideraciones que paso a exponer.

Resalto, ante todo, el indudable carácter alimentario de mis acreencias. En tal sentido y en relación a la ley nº 8851 que omite toda consideración al respecto nuestro Máximo Tribunal Provincial ha reafirmado el carácter alimentario de los honorarios profesionales regulados y ha sostenido que la fecha de su cobro no puede quedar sujeta a una pauta que sólo se atiene estrictamente a la antigüedad de la planilla firme, sin tomar en consideración una situación especial como la naturaleza alimentaria de la acreencia.

De allí que la ausencia de un tratamiento diferenciado al que la ley N° 8.851, y su Decreto Reglamentario N° 1583/1 (FE)-2.016, someten a las deudas del Estado, sin aprehender una circunstancia atendible como la de marras, conduce indefectiblemente al resultado disvalioso de que, en la práctica, se vean satisfechas primeramente obligaciones que no participan de las condiciones necesarias para merecer un despacho preferente, en desmedro de otras -como la que nos ocupa-, que sí ostentan tales características (cfr. sentencia N° 1.680 del 31/10/2.017, dictada en los autos "*Álvarez, Jorge Benito y otros s/ prescripción adquisitiva*").

De conformidad con la doctrina que emana de dicha sentencia, se sentó como criterio que ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley N° 8.851 ("*Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva*"), del art. 2 del Decreto N° 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, y del art. 2 de la precitada Ley N° 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público).

En definitiva, la prolongación de la espera presupuestaria para la particular situación de autos, en donde al crédito alimentario que

pertenece al letrado se le pretende imponer una cerril clausura indiferenciada que no reconoce ninguna alternativa de pronto y preferente pago, resulta lesiva y violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley (arts. 16, 18, art. 75 inc. 22 de la CN) que impiden que por una dilación excesiva el crédito alimentario resulte burlado en los hechos (*cfr Sala II de este fuero en sentencia N° 406/17 dictada en los autos: Paz Posse de Molina, Elvira de Lourdes vs Provincia de Tucumán s/ contencioso administrativo*).

La doctrina que emana de los fallos citados es plenamente aplicable al presente caso, por cuanto el municipio, al momento de adherirse a este régimen, no ha realizado ninguna modificación o reserva en el sentido de prever la preferencia de cobro cuando el crédito reúne alguna condición que merezca un tratamiento diferenciado (vgr. carácter alimentario). Pido se tenga presente.

En igual sentido se expidió esta Sala III de la Excma. Cámara al analizar la constitucionalidad de la ley N° 8.851 en ocasión de analizar su aplicación en el orden municipal (*cfr. "Manson de Martilotti vs Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Contencioso Administrativo expediente N° 26/14, sentencia N° 171 del 13/04/2018*) como así también en el propio ámbito provincial (*cfr. "Palomar, Felipe Mario vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/Amparo", expediente N° 787/14, sentencia N° 674 del 14/11/2.017; "Salvatierra, José Lucas vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo, expediente N° 307/14, sentencia N° 682 del 23/11/2.017, entre otras*).

Además de los argumentos centrales expuestos en los párrafos precedentes, resulta a todas luces evidente que la Provincia pretende mediante esta nueva normativa compurgar la inconstitucionalidad ya hartamente declarada en casos análogos al sub-lite de la Ley 8228 y sus anteriores predecesoras y prórrogas hasta llegar a la Ley 9068 y cctes., que no han hecho otra cosa que dar una cuasi "perpetuidad" a la declamada emergencia haciendo de tal suerte caso omiso a la condición de "temporalidad y razonabilidad" de que deben estar dotadas las leyes de emergencia para ser válidamente consideradas como tales.

Se pretende una vez más mediante las normas que cuestiono que el municipio ejecutado goce de la inejecutabilidad de sus condenas judiciales y de la inembargabilidad de sus fondos, conculcando de tal suerte derechos y garantías arraigadas en nuestra Ley Fundamental no sólo Nacional sino también Provincial, como ser entre otros, los artículos 17, 19, 28, 31, 75 inc. 12, 126, etc., toda vez que pretende pulverizar y convertir en letra muerta en este caso concreto, mi derecho irrevocablemente adquirido por la sentencia de honorarios recaída en autos, que debe cumplirse, ya que de no entenderlo así, se tornaría en un acto jurisdiccional meramente declarativo, carente de sentido y contenido y atentaría además contra las bases mismas del estado republicano, siendo que el poder ejecutivo, en connivencia con el poder legislativo, pretenden dejar sin efecto las sentencias y directrices dictadas por este órgano judicial de contralor.

Es del caso recalcar nuevamente que conforme a lo dispuesto por el art. 31 de nuestra Carta Magna, el régimen estatuido por el código de fondo prevalece sobre las leyes provinciales y este último ordenamiento establece la posibilidad de que las personas jurídicas, entre las cuales se encuentra el municipio accionado *“pueda ser demandado por acciones civiles y hacerse ejecución de sus bienes”*.

El municipio no puede eludir el pago de sus obligaciones mediante las normativas que cuestiono, por cuanto violentaría además lo dispuesto por el código de fondo, que como es sabido acuerda al acreedor la facultad de emplear los medios necesarios para el lleno de tal cometido y que no es otra cosa de que pueda perseguir la ejecución de los bienes de su deudor.

La legislación que impugno es más que una postergación solapada o encubierta de las anteriores, ya que si bien no se vale del término “prórroga”, de su contexto no puede inferirse otra cosa, toda vez que, de hecho, constituye una postergación y nada impide que esto se repita una y otra vez hasta el infinito.

No otra cosa es lo que pretende esta nueva ley. No puede el Estado por medio de ella ni ninguna otra postergar irrazonable y constantemente el cumplimiento de obligaciones que emanan de derechos adquiridos - especialmente los

alimentarios - y terminar decidiendo por sí mismo cuándo y cómo pagar. Justamente esto es lo que se pretende en la especie con el mecanismo de pago que dan cuenta los arts. 4 y 5, mediante los cuales se implementa la elaboración de un "registro de acreedores" y la posibilidad de "elaborar propuestas de pago con los recursos necesarios".

La administración, de convalidarse las leyes que tacho como repugnantes a la Constitución, al no determinar con precisión la fecha de pago, implica introducir, como lo vino haciendo en las anteriores leyes de emergencia una condición puramente potestativa, al dejar supeditada a su sola voluntad la fecha de cumplimiento de la obligación.

Es decir que mediante una inconstitucional delegación en el Poder Ejecutivo, las leyes atacadas dejan librada a la voluntad de la Provincia deudora (y por ende del municipio accionado en autos) el cumplimiento de sentencias judiciales.

De validarse su eficacia constitucional –supuesto en el que me coloco al sólo efecto de la argumentación- las sentencias firmes dictadas por el órgano jurisdiccional-, se tornarían en una simple "autorización para registrarse como acreedor", pues sin ella no podría iniciarse el procedimiento ante el Ejecutivo (art. 4º).

En tales condiciones, la ley resulta repugnante a la Carta Magna, pues violenta las garantías de la propiedad, la defensa en juicio y el juez natural (arts. 17 y 18, C.N.). La Administración se convierte en el exclusivo "juez" de la oportunidad para el cumplimiento de los actos jurisdiccionales –avasallando así en su esencia el art. 109 de la Constitución Nacional- sustrayéndose al cumplimiento de sus obligaciones, y determinando por sí y ante sí cuándo las cumplirá. En otras palabras, el Estado se está colocando al margen del orden jurídico.

No hay argumentos valederos para apartarse del precedente de la Excma. Corte, la cual ha declarado la invalidez constitucional de la emergencia económica y ha consagrado la concreta posibilidad de que se embarguen las cuentas de la Provincia y/o del municipio, cuando el crédito tiene naturaleza alimentaria como es el caso que ahora nos ocupa.

En síntesis, la percepción de mis honorarios profesionales regulados por sentencia firme en el presente proceso se tornarían ilusorios o de cobro incierto en el tiempo, si se declarasen constitucionales la ley 8851 y del decreto 1538/18228 relativas a la inembargabilidad de los fondos de la Provincia, como asimismo las normas por las cuales el municipio accionado adhirió a este régimen.

Basta con analizar el desarrollo de la historia legislativa en Tucumán para advertir que este estado de emergencia será prorrogado indefinidamente y el capital reclamado jamás llegará a ser percibido, puesto que las leyes dictadas en el marco de la supuesta emergencia pública no son mas que argucias de quienes están en el poder para no cumplir con sus obligaciones y ceder el problema a quien continúe su mandato.

Por lo expuesto, solicito se haga lugar al planteo formulado por el suscripto por su propio derecho, y en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad, para el caso, de los artículos 2 y 4, último párrafo, de la Ley N° 8.851 y, en consecuencia, de la Ordenanza Municipal N° 4.793/2016, que adhiere a tal normativa, y del Decreto Municipal N° 4.272 del 07/12/2016, artículo 1, y de toda otra norma modificatoria o complementaria de las mismas que se dictare hasta tanto este planteo se resuelva, y que impida de alguna manera la percepción de mi legítima acreencia alimentaria, y en el pedido de dar curso a la presente ejecución de honorarios y a derecho de solicitar oportunamente un embargo ejecutivo por las sumas adeudadas al suscripto por honorarios. Pido se tenga presente.-

Si bien en reiterados pronunciamientos la Excma. Sala declaró la inconstitucionalidad tanto de la Ley 8.851 como de la Ley 8.228 y sus prórrogas, un nuevo examen de la cuestión, a la luz del sentido del voto del Dr. René Mario Goane en sentencia N° 742 del 12-06-2017 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, en los autos "*Arce Leandro vs. Provincia de Tucumán s/ Especiales (Residual). Desalojo*", nos lleva a concluir que el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad referido a las Leyes N°

8.228, y sus prórrogas, incluida la Ley N° 9.068 deviene inoficioso, por cuanto han perdido actualidad y no se aplican al presente caso.

Ello en razón que el procedimiento de pago que rige para dar cumplimiento a un pronunciamiento judicial firme que condene al Estado Provincial o municipal al pago de una suma de dinero, se encuentra previsto en la Ley N° 8.851 y su Decreto Reglamentario N° 1583/1 (FE), que constituyen un régimen permanente sobre la materia, cuya inconstitucionalidad se declara en los presentes actuados.

En este sentido se pronunció recientemente la Sala I de esta Excma. Cámara del fuero en sentencia N° 180 del 03/04/2019 dictada en el Expte. N° 343/13, caratulado: *"S.A. Azucarera Argentina C.E. I vs Provincia de Tucumán s/ Nulidad / Revocación"*, como así también lo hizo esta Sala III en la sentencia N° 232 del 22/04/2019, pronunciada en el Expte. N° 167/16, caratulado *"Alderete, Daniel Eduardo vs. Provincia de Tucumán D.G.R.- s/ Inconstitucionalidad"*.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y para el hipotético caso de que V.E. no compartiere el criterio vertido en los párrafos precedentes, dejo expresamente a planteada la inconstitucionalidad de las leyes nros. 8228, 8358, 8753, 8826, 9068, – Emergencia Económica-, asimismo la Ordenanza Municipal nº 3.049/03, y la de toda otra norma relativa a la materia, ya sea modificatoria, complementaria o concordante con las citadas precedentemente, promulgadas por la Provincia y a las que adhirió el Municipio accionado, ordenando la suspensión de las ejecuciones de sentencia firmes coma así también la inembargabilidad de sus bienes.

Fundo tal planteo en las mismas líneas argumentales vertidas en el inicio del presente planteo. A ellos agrego como fundamento, que los municipios carecen de potestades constitucionales para suspender los procesos judiciales, cuya regulación compete en forma exclusiva a la Legislatura de la Provincia (artículo 67, inciso 21 de la Constitución Provincial del 26/06/06). Excma. Cámara Contencioso Administrativo Sala I, autos: *"Andar S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Inconstitucionalidad"*. Expte. nº 434/99.

En mérito a ello la declaración de inconstitucionalidad de las leyes provinciales se expande a las normas municipales que regularon las emergencias dispuestas en los respectivos municipios.

En lo referido a la suspensión de las ejecuciones de sentencias judiciales establecida en el artículo 3º de la Ordenanza Municipal nº 3.049/03, deviene inconstitucional por los argumentos ya vertidos y por que los Municipios carecen de potestades constitucionales para suspender los procesos judiciales, cuya regulación compete en forma exclusiva a la Legislatura de la Provincia (artículo 67, inciso 21 de la Constitución Provincial del 26/06/06). Excma. Cámara Contencioso Administrativo Sala I, autos: *“Andar S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Inconstitucionalidad”*. Expte. nº 434/99.

PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.E. pido:

- 1.) Tenga por iniciada la presente ejecución de honorarios, mande formar incidente separado para su tramitación, y ordene trabar embargo sobre las cuentas que tuviera la ejecutada en el Banco Macro, por la suma de \$ 1.132.611,62 mas la que V.E. entendiera suficiente para cubrir acrecidas
- 2.) Tenga por planteada formalmente la inconstitucionalidad de la ley 8851 y su Decreto Reglamentario nº 1538/1-FE, la Ordenanza nº 4793, el Decreto Municipal nº 4272/16 y la de toda otra norma relativa a la materia, ya sea modificatoria, complementaria o concordante con las citadas precedentemente, promulgadas por la Provincia y/o por municipio accionado. Corra traslado al accionado por el término de ley del planteo de inconstitucionalidad, y en su oportunidad haga lugar al mismo con costas si hubiere oposición;
- 3.) Tenga por planteada expresamente la inconstitucionalidad de las leyes nros. 8228, 8358, 8753, 8826, 9068, – Emergencia Económica-, asimismo la Ordenanza Municipal nº 3049/03,

y la de toda otra norma relativa a la materia, ya sea modificatoria, complementaria o concordante con las citadas precedentemente, promulgadas por la Provincia y/o por municipio accionado. Corra traslado al accionado por el término de ley del planteo de inconstitucionalidad, y en su oportunidad haga lugar al mismo con costas si hubiere oposición;

4.) Intime de pago a la accionada, en su domicilio real de calle 9 de Julio 598 de San Miguel de Tucumán (adjunto bono de movilidad), por el importe del capital reclamado (\$ 1.132.611,62 expresados a valores de SEPTIEMBRE 2019) con más la suma que se justiprecie provisoriamente para responder por acrecidas,

5.) Haga conocer al municipio ejecutado que tales actos procesales importan la citación de remate a los efectos de ley, para que en el perentorio término de cinco días oponga las excepciones legítimas que tuviere, bajo apercibimiento de llevarse adelante la presente ejecución,

6.) Oportunamente se dicte sentencia, ordenando llevar adelante la presente ejecución de honorarios hasta hacerse íntegro pago de todos los rubros reclamados, con expresa imposición de costas;

Proveer de conformidad, será JUSTICIA